

16184

ORDEN 43/1983, de 25 de mayo, por la que se delegan facultades contempladas en el Reglamento de ejecución de la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional, aprobado por Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero.

En uso de las facultades que me confieren los artículos 14, 27 y 82 del Reglamento de ejecución de la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional, aprobado por Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, y artículos 22 y 32 de la Ley del Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 26 de julio de 1957, y con objeto de lograr una mayor agilidad en el trámite y un plazo inferior en adoptar las resoluciones correspondientes, dispongo:

Artículo 1.º Se delega en las autoridades militares jurisdiccionales de cada uno de los tres Ejércitos la concesión de la autorización prevista en el artículo 14 del Reglamento de la Ley 8/1975, de zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional, relativa a la solicitud de realizar plantaciones arbóreas o arbustivas y levantar edificaciones o instalaciones análogas de superficie en las zonas lejanas de seguridad que de ellas dependan, siempre que no impliquen perjuicio para el empleo óptimo de los medios integrados en la instalación militar de que se trate o queden expuestos a sufrir, por dicho empleo, daños susceptibles de indemnización.

Art. 2.º Se delega en las autoridades militares jurisdiccionales de cada uno de los tres Ejércitos la concesión de la autorización militar prevista en el artículo 27 del Reglamento de la Ley 8/1975, de zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional, relativa a la instalación de industrias o actividades que, con arreglo a los Reglamentos Generales (y locales, en su caso), vigentes en la materia, puedan calificarse de molestas, insalubres, nocivas o peligrosas dentro de una franja de 2.000 metros de anchura en torno a los campos de instrucción y maniobras desde su perímetro exterior, condicionando dicha autorización a la inclusión de dispositivos de corrección de sus humos, emanaciones y similares, de forma que garanticen que no perjudicarán gravemente la salud ni impedirán la visibilidad y demás condiciones de actuación eficaz en el campo militar de que se trate.

Art. 3.º Se delega en los Capitanes Generales de las Regiones Militares la concesión de autorizaciones previstas en el artículo 82 del Reglamento de ejecución de la Ley 8/1975, de zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional, relativas a solicitudes de adquisición por extranjeros de terrenos o fincas que no rebasen los 2.000 metros cuadrados de superficie, debiendo dichas autoridades dar inmediata cuenta al Ministerio de las autorizaciones que otorguen en virtud de esta delegación.

Esta delegación no tendrá lugar cuando el solicitante sea ya titular de terrenos o propiedades cuya superficie, unida a la que desea adquirir, rebasa la extensión mencionada en el párrafo anterior, ni cuando el Capitán General estime que debe informar otro Ejército.

Madrid, 25 de mayo de 1983.

SERRA SERRA

16185

ORDEN 373/90012/1983, de 25 de mayo, por la que se declara la urgente necesidad para la defensa y urgente ocupación por expropiación forzosa de 2 hectáreas 8 áreas y 5 centiáreas de terrenos en el término municipal de San Sebastián de la Gomera para la ubicación de instalaciones de la Red Regional de Canarias (RRC) en La Gomera.

A los efectos pertinentes se hace público que en Consejo de Ministros celebrado el 13 de abril de 1983 se declara la urgente necesidad para la defensa y la urgente ocupación por expropiación forzosa de 2 hectáreas 8 áreas y 5 centiáreas de terrenos en el término municipal de San Sebastián de la Gomera, que forman parte de las parcelas número 574 a y 574 b del citado término municipal, para la ubicación de instalaciones de la Red Regional de Canarias (RRC) en La Gomera.

Término municipal	Polígono	Parcela	Superficie
San Sebastián de la Gomera.	13	574 a	0,4599
	13	574 b	1,8206
Suma total			2,0805

Con ello se da cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 9.º y 10 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, los del Reglamento para su aplicación y lo previsto en los artículos 52 y 53 de la misma Ley.

Madrid, 25 de mayo de 1983.

SERRA SERRA

16186

ORDEN 373/90013/1983, de 25 de mayo, por la que se declara la urgente necesidad para la defensa y urgente ocupación por expropiación forzosa de 7 áreas 50 centiáreas de terrenos en el término municipal de Valverde (El Hierro) para camino de acceso a las instalaciones de la Red Regional de Canarias (RRC) en El Hierro.

A los efectos pertinentes se hace público que en Consejo de Ministros celebrado el 13 de abril de 1983 se declara la urgente necesidad para la defensa y la urgente ocupación por expropiación forzosa de 7 áreas y 50 centiáreas de terrenos en el término municipal de Valverde (El Hierro), que forma parte de la parcela número 113 del citado término municipal, para camino de acceso a las instalaciones de la Red Regional de Canarias en El Hierro.

Término municipal	Polígono	Parcela	Superficie
Valverde (El Hierro)	25	113	0,0750

Con ello se da cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 9.º y 10 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, los del Reglamento para su aplicación y lo previsto en los artículos 52 y 53 de la misma Ley.

Madrid, 25 de mayo de 1983.

SERRA SERRA

16187

ORDEN 373/90011/1983, de 25 de mayo, por la que se declara la urgente necesidad para la defensa y urgente ocupación por expropiación forzosa de 1 hectárea 7 áreas y 18 centiáreas de terrenos en el término municipal de Valverde (El Hierro) para la ubicación de instalaciones de la Red Regional de Canarias (RRC) en El Hierro.

A los efectos pertinentes se hace público que en Consejo de Ministros celebrado el 13 de abril de 1983 se declara la urgente necesidad para la defensa y la urgente ocupación por expropiación forzosa de 1 hectárea 7 áreas y 18 centiáreas de terrenos en el término municipal de Valverde (El Hierro), que forman parte de la parcela número 423 del citado término municipal, para la ubicación de instalaciones de la Red Regional de Canarias (RRC) en El Hierro.

Término municipal	Polígono	Parcela	Superficie
Valverde (El Hierro)	25	423	1,0718

Con ello se da cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 9.º y 10 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, los del Reglamento para su aplicación y lo previsto en los artículos 52 y 53 de la misma Ley.

Madrid, 25 de mayo de 1983.

SERRA SERRA

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

16188

ORDEN de 7 de abril de 1983 por la que se dispone la ejecución de la sentencia desestimatoria de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de fecha 2 de noviembre de 1982, en el recurso interpuesto contra la sentencia dictada en 30 de enero de 1981 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en relación con el Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 1982.

Ilmo. Sr.: Visto el testimonio de la sentencia dictada en 2 de noviembre de 1982 por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en recurso contencioso administrativo número 20.925/1978, interpuesto por la Entidad mercantil «Sociedad Productora de Fuerzas Motrices, S. A.», contra la sentencia dictada en fecha 30 de enero de 1981 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en relación con el Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 1982;

Resultando que concurren en este caso las circunstancias previstas en el párrafo 5.º del artículo 105 de la Ley de 27 de diciembre de 1958.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución, en sus propios términos, de la referida sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la "Sociedad Anónima, Fuerzas Motrices", debemos confirmar y confirmamos en su totalidad la sentencia dictada con fecha 30 de enero de 1981 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso número 20.925, que confirmó el acuerdo dictado por el Tribunal Económico-Administrativo Central con fecha 26 de septiembre de 1978, el cual, a su vez, había confirmado el acuerdo dictado por el Jurado Central Tributario con fecha 26 de febrero de 1978, sobre coeficiente de desgravación, fijando con carácter definitivo el coeficiente de desgravación señalado en la Ley de 15 de mayo de 1945 a la Sociedad apelante en este recurso, a efectos del Impuesto sobre Sociedades; sin hacer pronunciamiento alguno en cuanto al pago de las costas causadas en este recurso de apelación.»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de abril de 1983.—P. D., el Subsecretario, José Antonio Cortés Martínez.

Ilmo. Sr. Director general de Tributos.

16189

ORDEN de 7 de abril de 1983 por la que se dispone la ejecución de la sentencia estimatoria de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de fecha 28 de junio de 1982, en el recurso interpuesto contra la sentencia dictada en 4 de noviembre de 1980 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en relación con el Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 1975.

Ilmo. Sr.: Visto el testimonio de la sentencia dictada en 28 de junio de 1982 por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-administrativo número 21.212, interpuesto por la Administración General del Estado, representada por el Abogado del Estado, siendo parte apelada el excelentísimo Ayuntamiento de Cuenca, contra la sentencia dictada en 4 de noviembre de 1980, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en relación con el Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 1975;

Resultando que concurren en este caso las circunstancias previstas en el párrafo 5.º del artículo 105 de la Ley de 27 de diciembre de 1958,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución en sus propios términos de la referida sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Abogado del Estado, debemos revocar y revocamos la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional con fecha 4 de noviembre de 1980 en el recurso número 21.212, que anuló los acuerdos dictados por el Ministerio de Hacienda y por el Tribunal Económico-Administrativo Central con fechas 11 de noviembre de 1975 y 26 de junio de 1979, respectivamente, que denegaron a la Entidad "Ayuntamiento de Cuenca Maderas, S. A.", la exención del Impuesto sobre Sociedades; cuyos acuerdos últimamente mencionados declaramos ajustados a derecho; sin hacer pronunciamiento alguno en cuanto al pago de las costas causadas en ninguna de las dos instancias de este recurso.»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de abril de 1983.—El Subsecretario, José Antonio Cortés Martínez.

Ilmo. Sr. Director general de Tributos.

16190

ORDEN de 18 de abril de 1983 por la que se conceden a la Sociedad Cooperativa «Los Batanes» los beneficios fiscales que establece la Ley 152/1983, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés preferente.»

Ilmo. Sr.: Vista la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 21 de marzo de 1983, por la que se declara comprendida en zona de preferente localización industrial agraria a la Sociedad Cooperativa «Los Batanes», cédula de identificación fiscal F-13011739, por cumplir las condiciones y requisitos que señala el Real Decreto 634/1978, de 13 de enero, para la instalación de una industria de aserrado mecánico de maderas y elaboración de carbón vegetal, en el término municipal de Fuencaiente (Ciudad Real), incluyéndola en el grupo A de la Orden de ese Ministerio de 5 de marzo de 1983,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Tributos, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.º de la Ley 152/1983, de 2 de diciembre, y artículo 8.º del Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, ha tenido a bien disponer:

Primero.—Uno. Con arreglo a las disposiciones reglamentarias de cada tributo, a las específicas del régimen que deriva de la Ley 152/1983, de 2 de diciembre, y al procedimiento señalado por la Orden de este Ministerio de 27 de marzo de 1985, se otorgan a la Sociedad Cooperativa «Los Batanes», los siguientes beneficios fiscales:

A) Reducción del 95 por 100 de la cuota de Licencia Fiscal del Impuesto Industrial durante el periodo de instalación.

B) Reducción del 95 por 100 del Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores e Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas que graven la importación de bienes de equipo y utillaje de primera instalación, cuando no se fabriquen en España. Este beneficio se hace extensivo a los materiales y productos que, no produciéndose en España, se importen para su incorporación en primera instalación, a bienes de equipo de producción nacional.

Dos. El beneficio fiscal a que se refiere la letra B) se entiende concedido por un periodo de cinco años a partir de la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado». No obstante, dicha reducción se aplicará en la siguiente forma:

1. El plazo de duración de cinco años se entenderá finalizado el mismo día que, en su caso, se produzca la integración de España en las Comunidades Económicas Europeas.

2. Dicho plazo se iniciará, cuando procediere, a partir del primer despacho provisional que conceda la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales, de acuerdo con lo previsto en la Orden de 4 de marzo de 1978.

Segundo.—El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que asume la Empresa beneficiaria dará lugar a la privación de los beneficios concedidos y al abono o reintegro, en su caso, de los impuestos bonificados.

Tercero.—Contra la presente Orden podrá interponerse recurso de reposición, de acuerdo con lo previsto en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ante el Ministerio de Economía y Hacienda, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 18 de abril de 1983.—P. D. (Orden de 11 de febrero de 1983), el Secretario de Estado de Hacienda, José Sevilla Segura.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

16191

ORDEN de 18 de abril de 1983 por la que se conceden a las Empresas que se citan los beneficios fiscales de la Ley 152/1983, de 2 de diciembre.

Ilmo. Sr.: Vista la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 11 de marzo de 1983, y el acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 1983, por la que se declaran a las Empresas que al final se relacionan, comprendidas en zona de preferente localización industrial de las Islas Canarias, al amparo de lo previsto en el Real Decreto 2553/1979, de 21 de septiembre, incluyéndolas en el grupo A) de los señalados en la Orden de 8 de mayo de 1976 de dicho Departamento,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Tributos, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.º de la Ley 152/1983, de 2 de diciembre, y en el artículo 5.º del Real Decreto 2553/1979, de 21 de septiembre, ha tenido a bien disponer:

Primero.—Uno. Con arreglo a las disposiciones reglamentarias de cada tributo, a las específicas del régimen que deriva de la Ley 152/1983, de 2 de diciembre, y al procedimiento señalado por la Orden de 27 de marzo de 1985, de este Ministerio, se otorga a las Empresas que al final se relacionan, el siguiente beneficio fiscal:

A) Reducción del 95 por 100 de la cuota de Licencia Fiscal del Impuesto Industrial durante el periodo de instalación.

Segundo.—El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que asumen las Empresas beneficiarias dará lugar a la privación del beneficio concedido y al abono o reintegro, en su caso, del Impuesto bonificado.

Tercero.—Contra la presente Orden podrá interponerse recurso de reposición, de acuerdo con lo previsto en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ante el Ministerio de Economía y Hacienda, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación.

Relación de Empresas

«Carpindus Díaz, S. L.». IC-176. Cédula de identificación fiscal B-35054127. Actividad de madera en general, en Santa María de Guía (Gran Canaria).

«Europalets, S. A.». IC-180. Cédula de identificación fiscal A-35050245. Actividad de fabricación de palets de madera en el polígono industrial de Arinaga, Agüimes (Gran Canaria).